

Prólogo

PADDY WOODWORTH

El terrorismo es un término muy resbaladizo, el cual desafía una definición clara y firme, debido a que es utilizado habitualmente para denigrar actos de violencia de aquellos con los que no estamos de acuerdo; mientras que, a la vez, evitamos de manera escrupulosa aplicarlo a acciones violentas idénticas cometidas por aquellos a los que apoyamos. Este hecho es especialmente cierto cuando hacemos referencia al terrorismo de Estado, debido a que el Estado ha sido el propietario tradicional del «monopolio de la violencia legítima» weberiano. Aunque no era la intención de Max Weber, esto implica que, en la práctica, acciones violentas cuestionables y abusos por parte de las fuerzas del Estado hayan sido omitidos, silenciados o incluso justificados en la base de que el fin (la derrota del terrorismo) justifica los medios.

Por lo tanto, recibo de forma gratificante este libro escrito por Jerónimo Ríos y Egoitz Gago, el cual rompe los silencios que han sido normalmente asociados con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y en especial con el derecho de sus víctimas. El libro describe, desde el principio y firmemente basado en los hechos, a los GAL y sus apoyos como terroristas de Estado y como los actores de la guerra sucia que claramente eran. Aun más importante, dan voz a aquellos que han perdido seres queridos en acciones de los GAL, o que han sufrido sus ataques de manera directa. Haciendo este ejercicio, los autores llenan un gran vacío en la extensa literatura académica existente sobre ETA y que normalmente solo menciona a los GAL de forma limitada, fracasando en presentar la amenaza real a la democracia española que aquellos representaban.

Los capítulos que abren el libro construyen un caso sólido, basado en una sucinta acumulación de datos objetivos, que defiende que los GAL no eran disidentes o los hijos incontrolados de la dictadura franquista, como el BVE (Batallón Vasco Español) o los GCR (Guerrilleros de Cristo Rey) —sus predecesores paramilitares de extrema derecha—. En cambio, eran actores de un grupo organizado, aunque algo caótico, el cual fue creado por altos miembros del gobierno democráticamente elegido del PSOE. Tenían unos objetivos políticos claros y eran activamente super-

visados por altos mandos de la Guardia Civil, la Policía y la inteligencia militar. Sin lugar a duda, hay factores complejos en la historia de los GAL, como la intervención de Mario Conde, la manipulación de los «Papeles del CESID» o las manipulaciones políticamente motivadas por parte de algunos actores en un sistema de justicia abiertamente polarizado, a los que los autores no dedican espacio en este libro. Pero estos factores no demeritan la tesis central de los autores: los GAL fueron creados y mantenidos como una organización de terrorismo de Estado.

Esto significa que su relativamente corto periodo de actividad y número de víctimas no disminuye la importancia de lo que los GAL nos cuentan: que un Gobierno democrático como el español y sus instituciones de seguridad estaban a favor de asesinar terroristas de ETA sin un juicio, en un país donde la pena de muerte estaba abolida. Es más, estaban dispuestos a asesinar civiles como «daño colateral». Tal y como sugiere Kepa Pikabea en la profunda entrevista que está en este libro, el asesinato de civiles podría haber sido parte deliberada de la estrategia de los GAL, porque era efectivo para conseguir su objetivo más importante: el fin del santuario de ETA y su apoyo popular en Iparralde.

Es importante notar la escasez de autores, tanto españoles como internacionales, que han considerado que esta violación de los principios básicos de la democracia es meritoria de atención en sus trabajos sobre el terrorismo de ETA o sobre el periodo del PSOE en el gobierno de España. Esto está reflejado también en la débil representación de los GAL en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, siendo este uno de los muchos problemas de tan importante pero defectuoso proyecto.

Cuando se escribe sobre los GAL, una pregunta surge de manera inevitable y es si dicho terrorismo de Estado fue apoyado por el mismo jefe de Gobierno, el presidente Felipe González. Teniendo en cuenta que su propio ministro del Interior fue condenado por estar involucrado con los GAL, es justo decir categóricamente que González tiene responsabilidad política por un grupo que, durante tres años, fue apoyado por varios miembros de su partido y altos cargos del Estado, ya fuera por acción o por omisión. No es posible afirmar con certeza si estaba directamente involucrado, pero las declaraciones realizadas al periodista Pedro J. Ramírez, citadas por los autores, así como varios comentarios ambiguos sobre el tema, sugieren de manera importante que los GAL tenían su total apoyo. Una vez más, las implicaciones de este tema han sido ignoradas de manera asombrosa por demasiados historiadores.

Otra cuestión que aparece frecuentemente en este libro, repetida por varios entrevistados, es la complicidad del Estado francés con los GAL. Hay un consenso entre ellos de que había pocos colaboradores activos de los GAL entre las fuerzas de seguridad francesas, y ninguno ha sido claramente identificado, a excepción

del misterioso «Jean Louis». Aun así, para que los GAL operaran con la impunidad que disfrutaban tan frecuentemente en territorio francés, se debe sospechar que algunos oficiales de rango medio, por lo menos, estaban involucrados en mantener las rutas de escape sin controles en los momentos cruciales después de los ataques cometidos por los GAL.

Sin embargo, cuando los asesinos de los GAL eran detenidos (frecuentemente por refugiados vascos), se enfrentaban a juicios en los tribunales franceses y llegaron a recibir fuertes sentencias. Lo que es desconcertante es la impresión de que el Estado francés nunca comenzó ninguna investigación exhaustiva sobre una organización que reivindicó el asesinato de 26 personas, bajo las mismas siglas, durante tres años, en un área muy pequeña. Como irlandés que soy, podría añadir que los Gobiernos de Dublín sí han hecho algunos esfuerzos (pero no muchos, y sin éxito) en su propósito de aclarar la colaboración que mantuvieron los servicios británicos con actos terroristas de lealistas en nuestra república —sobre todo con las bombas en Monaghan y Dublín en 1974, que dejaron consigo 34 víctimas mortales—. Los británicos han negado sistemáticamente cualquier información sobre estos actos.

Aunque esto es pura especulación, es lo suficientemente convincente como para imaginar que había algún tipo de acuerdo tácito, quizás entre el presidente francés, François Mitterrand y el mismo González, o quizás entre sus ministros del Interior, que otorgara a los GAL un campo de operaciones sin obstáculos, con el fin compartido de debilitar el apoyo local vasco francés al santuario de ETA. El aumento de objetivos civiles que no tenían nada que ver con ETA de parte de los GAL, entre 1985 y 1986, parece ser la estrategia más exitosa al respecto. Si esto fue deliberado, posiciona a los GAL en la categoría más extrema de organizaciones terroristas, con la estrategia de aterrorizar directamente a civiles inocentes que no tenían ninguna conexión con el enemigo terrorista. Este periodo, como mencionan los autores, marca el fin de las operaciones de los GAL y da comienzo a una colaboración activa fuerte entre los Estados español y francés en la extradición de sospechosos de ETA. Es difícil no creer que estos dos fenómenos no estén directamente relacionados.

Soy consciente que me he enfocado sobre todo en temas que aparecen en los capítulos narrativos, pero me gustaría concluir con algunos comentarios sobre las entrevistas que han permitido a las víctimas de los GAL hablar por sí mismas, extensamente, sobre sus experiencias, diversas, pero desgarradoras. Muchas de ellas, por lo que yo sé, nunca han hablado en público, y aportan material valiosísimo para entender el impacto del terrorismo, en este caso terrorismo de Estado, en las vidas de las personas.

Hay datos fascinantes de víctimas que fueron cercanas, o incluso parte, de ETA, como Kepa Pikabea. Él expone argumentos novedosos, como la idea de que ETA

decidió aumentar la utilización de coches bomba por la experiencia y crueldad de los GAL. Se puede dudar si tiene razón en esto, pero lo que queda fuera de cualquier duda es que el terrorismo de Estado de los GAL fue un regalo propagandístico para ETA y sus asociados, al menos para una generación o quizás más. Sin embargo, las entrevistas que más me han impactado han sido las realizadas a personas sin conexión con ETA o la izquierda abertzale, en especial las de Véronique Caplanne, Mainer García Martín, Sylvie Olazcuaga, Itziar Zabalza y Tamara Muruetagoiena.

No es mi intención contribuir a la noción de «jerarquía de las víctimas», pero el hecho de que esas mujeres no hayan tenido ninguna red de apoyo, ni grupo de solidaridad o asociación de víctimas que estuviera dispuesta a ayudarlas de manera clara, expresa crudamente la dificultad que han sufrido para asumir los durísimos actos de violencia cometidos contra sus seres queridos. Ellas no han recibido ningún apoyo del Estado francés o sus instituciones. Han experimentado, y aún lo hacen, un sentimiento de abandono y soledad, tanto de su propia sociedad en general, como de aquellos grupos que tienden a instrumentalizar a las víctimas para fines políticos. Hay una desnuda honestidad que habla alto y claro del dolor y la confusión infligida en esos casos, así como la extrema dificultad que han tenido a la hora de llegar a una resolución o cierre del trauma que han sufrido. Espero que su participación en este libro con dos autores tan receptivos como Ríos y Gago, les hayan ayudado a moverse en esa dirección.

Reflexionando sobre el papel de los autores, así como en mi propio rol como autor de *Guerra Sucia*, *Manos Limpias*, hace más de 20 años, solo puedo llegar a la siguiente conclusión: los escritores pocas veces tenemos el poder de generar grandes cambios en el mundo, pero, al menos, podemos registrar lo que ocurre en él de la mejor forma posible y quizás, solo quizás, hacer menos probable que las mismas cosas vuelvan a ocurrir.

Dublín (Irlanda), 10 de febrero de 2025